INFORMACIONES

1. LAS NACIONES UNIDAS EXIGEN A LA
DICTADURA QUE RINDA CUENTAS SOBRE
LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

El 3 de marzo, después de examinar durante tres sesiones la situación en el Uruguay, la Comisión de

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reunida en Ginebra, decidió emitir informes a la dictadura y mantener el caso del Uruguay en el punto 12 de su orden del día, relativo a las violaciones graves de los derechos humanos.

Durante los debates, Carlos Giambruno, jefe de la delegación del Gobierno uruguayo, fue el único miembro de la Comisión que defendió la posición de la dictadura. Ninguno de los otros 31 integrantes —ni siquiera el representante de Brasil— intervino para apoyarlo. En cambio, las delegaciones de Cuba, los Estados Unidos, Austria, Suecia, Australia y el Reino Unido condenaron categóricamente las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura y mencionaron numerosos casos concretos que demuestran su gravedad y su carácter sistemático.

Si bien una maniobra de procedimiento impidió la adopción de otras medidas, quedó en evidencia que la dictadura no estaba dispuesta a aceptar la constitución de un Grupo Especial de las Naciones Unidas como el que se creó hace ya cuatro años para Chile o el que se constituyó este año para Uganda. Las normas de procedimiento de la Comisión exigen el consentimiento del país de que se trate para que pueda constituirse un mecanismo de esa naturaleza. A pesar de que el representante de la dictadura había declarado en Montevideo, al ser interrogado sobre la conveniencia de que miembros de las Naciones Unidas visiten el Uruguay para examinar la situación de los derechos humanos, que "no existe ningún inconveniente", que "nuestras puertas están abiertas" y que "no tenemos ninguna preocupación por ocultar determinados aspectos de nuestra realidad" ("El País", 30 de enero), se pudo muy bien de repetirlo ante la Comisión. Tampoco estuvo dispuesta la delegación de la dictadura a que la situación de los derechos humanos en el Uruguay se examinase en sesión pública, por lo cual sólo pudieron asistir a los debates las delegaciones de los 32 Estados miembros de la Comisión. De todos modos, al reanudarse las sesiones públicas, el Presidente de la Comisión anunció que se habían tomado medidas con relación al Uruguay y otros ocho países.

Durante las sesiones secretas se acordó que, al reanudarse las sesiones públicas, ningún orador podría referirse a los países sobre los cuales se habían adoptado medidas. Así lo informó el Presidente de la Comisión el 6 de marzo, cuando el jurista francés Jean-Louis Weil, representante de Pax Romana, había comenzado a exponer los resultados de la misión que cumplió en el Uruguay en diciembre, conjuntamente con los juristas Robert Goldman y Joaquín Martínez Bjorkman (ver "Informaciones", No 79). Por lo tanto, el Dr. Weil no pudo concluir su intervención y Carlos de Angeli, representante de la Federación Sindical

Mundial, se vio impedido de referirse en detalle a la situación sindical en el Uruguay. Varias delegaciones cuestionaron la interpretación del acuerdo a que había hecho referencia el Presidente.

La delegación de la dictadura, presidida por Carlos Giambruno, estuvo integrada además por Mario Fernández, Alberto Larroque, Graziella Dubra y Carlos M. Nadal.

Con motivo de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se hicieron presentes en Ginebra varios dirigentes políticos uruguayos -Enrique Erro, Hugo Villar, Enrique Rodríguez, Wilson Ferreira Aldunate y Hugo Cores-, los juristas Robert Goldman y Jean-Louis Weil, la Subdirectora de la "Washington Office on Latin America" (WOLA) -Jo-Marie Griesgraber-, Roberto Olmos -representante de la CNT-, miembros de la Secretaría Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay y varios familiares de presos políticos y desaparecidos. Se realizaron numerosas entrevistas con las delegaciones que participan en la Comisión, se les entregó documentación sobre la situación uruguaya, se ofreció una conferencia de prensa en la que participaron el Prof. Goldman, la hermana Griesgraber y familiares de desaparecidos, y se instaló un stand en el centro de Ginebra, recogiendo centenas de firmas al pie de un documento entregado posteriormente a la Comisión de Derechos Humanos en el que se solicitaba que éste órgano adoptase medidas ante las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura uruguaya.

El 27 de febrero, la Sra. María del Carmen Almeida de Quinteros, madre de Elena Quinteros, se acercó al representante de la dictadura y le entregó una carta cuyo texto se transcribe a continuación.

"Sr. Giambruno:

Cuando lea esta carta no quiero que vea en mí una de las tantas personas que se han cruzado con Ud. en estos pasillos.

He venido, como Ud. bien lo sabe, a denunciar la situación de mi hija, que fue secuestrada por policías uruguayos, sacada a golpes de la Embajada de Venezuela y brutalmente torturada.

Sé que mi hija está viva y en el Uruguay, pero desde el 28 de junio de 1976, es decir hace 19 meses, busco incansablemente que su gobierno conteste dónde está presa mi hija.

Son miles las madres que, como yo, no solamente lloran sus hijos desaparecidos, sino también sus muertos,

Cuando en la Comisión de Derechos Humanos tenga que contestar sobre las violaciones de esos derechos que su gobierno hace, piense en ese momento que todas las madres uruguayas le exigimos que informe la verdad.

(Firmado): Ma. del Carmen Almeida de Quinteros"

2. ACCIDENTE AEREO.

El 10 de febrero se produjo en Artigas el mayor accidente de la aviación uruguaya. Un avión de "Transportes Aéreos Militares Uruguayos" (TAMU) se precipitó sobre la pista del aeropuerto pocos momentos después de levantar vuelo. Fallecieron todos los ocupantes: los 38 pasajeros -entre ellos varios niños- y los seis miembros de la tripulación. La Fuerza Aérea Uruguaya utilizaba este aparato, adquirido hace más de 30 años, para el transporte de pasajeros. La capacidad del avión -un DC 3- es de 28 pasajeros y 4 tripulantes. La Fuerza Aérea anunció que recién estaría en condiciones de dar un informe oficial sobre el accidente en el plazo de un mes.

3. OEA: DOS CATEGORICAS
CONDENAS A LA DICTADURA.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó hace algunas semanas un informe sobre las graves violaciones de

los derechos humanos cometidas por el gobierno uruguayo, cuyo texto aún no se ha dado a conocer. Pocos días antes, en cambio, la Organización de Estados Americanos rechazó el ofrecimiento realizado por la dictadura uruguayana para realizar en Montevideo la próxima Asamblea General de la Organización. El rechazo se debió, precisamente, a la situación de los derechos humanos en el Uruguay y, en especial, a la negativa de la dictadura a autorizar una misión de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver "Informaciones", No 79).

El 31 de enero la Comisión General de la OEA procedió a la votación sobre el ofrecimiento uruguayo. Su aceptación requería 17 votos a favor, pero la dictadura sólo logró reunir 12 (incluido el propio). Votaron a favor de la realización de la Asamblea General en Montevideo: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. En contra se pronunciaron los Estados Unidos, Panamá y Venezuela. Los otros 10 países miembros de la OEA se abstuvieron, con lo cual impidieron que la dictadura uruguayana alcanzara los votos necesarios: Barbados, Colombia, Costa Rica, Grenada, Honduras, Jamaica, México, República Dominicana, Surinam y Trinidad y Tabago.

El 8 de febrero el Consejo Permanente de la OEA ratificó la decisión de la Comisión General. Antes de entrar a la sala, el representante de la dictadura, Carlos A. Roca, calificó de "descabelladas" las versiones según las cuales el Uruguay se retiraría de la OEA debido al resultado de la votación. Y ya en su discurso ante el Consejo señaló que la decisión era "antirreglamentaria" y constituía una "intromisión en los asuntos internos" del Uruguay. El representante de Venezuela, José María Machín, sostuvo que lo que constituía una "maniobra política" era la invitación de la dictadura, ya que estaba "destinada a debilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos". En el mismo sentido se pronunció el representante norteamericano, Gale McGee, quien indicó que la posición de su país se fundaba en la defensa de la integridad de dicha Comisión. Incluso el representante de Perú, que votó a favor del ofrecimiento de la dictadura, declaró que "hubiese dado que el Uruguay aceptara la presencia de la Comisión".

Mientras tanto, en Montevideo nunca se dio a conocer la respuesta del Presidente norteamericano Jimmy Carter a una nota confidencial que le remitió el Dr. Aparicio Méndez el 11 de enero, solicitándole un voto favorable de su país en la OEA. En cambio, se dio amplia publicidad a mensajes de solidaridad enviados, una vez adoptada la decisión, por los gobiernos de Argentina, Chile y Brasil. Se dijo incluso que este último país pediría una reconsideración de la decisión, pero la información fue desmentida por el Secretario General de la OEA, Alejandro Orfila. Asimismo, en medios oficiales uruguayos se reprochó al Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, por haber hecho varias llamadas telefónicas a otros Jefes de Estado para convencerlos de votar en contra del ofrecimiento uruguayo.

Finalmente, en medios oficiales se dijo que el Ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura, Alejandro Rovira, sería relevado de su cargo ante el fracaso diplomático sufrido en la OEA. Se mencionó incluso al Dr. Federico García Capurro como su probable sustituto.

4. LA OIT SIGUE CONSIDERANDO INSUFICIENTES LAS EXPLICACIONES DE LA DICTADURA.

El Consejo de Administración de la Organización Internacional del

Trabajo (OIT) volvió a examinar, en los primeros días de marzo, la situación sindical uruguaya. (En los Nos. 59, 64, 68 y 76 de "Informaciones" pueden verse los antecedentes sobre la consideración de este problema a nivel de la OIT.)

En esta oportunidad, el Consejo de Administración aprobó un nuevo informe del Comité de Libertad Sindical. En los últimos meses, la dictadura envió varias comunicaciones a la OIT, a fin de responder a los pedidos de informes que esta organización le había solicitado sobre la situación sindical en general y sobre numerosos casos de dirigentes y militantes sindicales detenidos. Una vez más, la OIT ha considerado insuficientes las explicaciones del gobierno uruguayo y, en consecuencia, ha decidido invitar al Ministro de Trabajo o a su representante que asista a la próxima reunión del Consejo de Administración, que tendrá lugar en Ginebra en el mes de mayo, a fin de que formule las precisiones del caso. En dicha reunión también se encontrarán presentes representantes de las organizaciones sindicales mundiales que han presentado denuncias contra la dictadura uruguaya, como la Confederación Mundial del Trabajo y la Federación Sindical Mundial, a la cual está afiliada la CNT.

El informe del Comité de Libertad Sindical hace referencia a algunas de las comunicaciones transmitidas por la dictadura. Por ejemplo, se señala que el 16 de diciembre informó que "el Cónclave Gubernamental decidió legislar en el futuro próximo, a través de la experiencia obtenida por la aplicación de las comisiones paritarias, sobre el estatuto y el funcionamiento de las asociaciones laborales, delimitando su campo de acción y excluyendo toda politización". Dos meses más tarde, la dictadura volvió a ocuparse de este asunto. El informe de la OIT indica, a ese respecto que el Gobierno afirma "que se ha encomendado al Ministro de Trabajo la formación de una comisión para redactar un anteproyecto de ley sobre organizaciones laborales. La primera responsabilidad de esta comisión será la redacción de las pautas de la proyectada ley, cuyo anteproyecto se hará conocer a la OIT y a las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores. El Gobierno insiste en que ha decidido legislar, en el futuro próximo y que esta tarea acompañará a las de reestructuración institucional en que el gobierno está empeñado. A este respecto, se ha decidido en agosto de 1977 que las elecciones nacionales se realizarán en noviembre de 1980 y que las medidas tendientes a este fin serán tomadas a partir de 1980."

Se transcriben a continuación los párrafos relativos a las conclusiones del informe del Comité de Libertad Sindical de la OIT:

"18. El Comité toma nota, en primer lugar, de la decisión tomada por el Gobierno al más alto nivel de legislar sobre el estatuto y el funcionamiento de las asociaciones laborales. Una comisión ha sido designada para redactar la legislación apropiada. El Gobierno insiste en un futuro próximo y que el anteproyecto de ley sindical será comunicado a la OIT. Sin embargo, parece que el resultado final de esta tarea dependerá del desarrollo relativo a la reestructuración institucional del país.

19. El Comité toma nota asimismo de todas las informaciones proporcionadas por el Gobierno respecto de la detención de sindicalistas. De estas últimas se infiere que un cierto número de sindicalistas han sido puestos en libertad provisional, que uno se encuentra nuevamente

en libertad definitiva y que otros están procesados. El Comité comprueba, sin embargo, que el Gobierno no envía informaciones sobre la mayoría de los sindicalistas mencionados en el informe anterior. Parecería sobre todo que no haya habido sentencia respecto de las personas procesadas ante jurisdicciones militares. Por último, el Comité observa que las organizaciones querellantes no han enviado informaciones complementarias respecto de ciertos sindicalistas citados en las quejas, tal como lo habían pedido el Gobierno y el Comité.

20. En estas condiciones, el Comité recomienda al Consejo de Administración:

- a) que tome nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno sobre la liberación provisional de un cierto número de sindicalistas citados por los querellantes y sobre las decisiones tomadas con vistas a la elaboración de una nueva legislación sindical;
- b) que lamenta, sin embargo, que el Gobierno no haya enviado informaciones sobre la mayoría de los sindicalistas mencionados en el último informe del Comité y que exprese nuevamente su preocupación por la lentitud del procedimiento judicial en lo que concierne a los numerosos sindicalistas aún detenidos;
- c) que se declare igualmente preocupado por el largo período al cabo del cual podrá ser puesta en vigor la nueva legislación sindical, que ha sido anunciada en varias ocasiones y cuya elaboración será ahora emprendida; que tome nota de la promesa del Gobierno de que el anteproyecto de ley sindical será comunicado a la OIT y que señale la importancia que concede a que la legislación esté en conformidad con los convenios sobre libertad sindical ratificados por el Uruguay;
- d) que pida al Gobierno el envío, a más tardar para el 30 de abril de 1978, de informaciones detalladas, en particular sobre los sindicalistas mencionados en el anexo, así como sobre la evolución de la situación en cuanto a la elaboración de una nueva legislación sindical;
- e) con el objeto de conocer con más detalles el estado de la cuestión, que invite al Ministro de Trabajo o, en caso de impedimento, su representante, para que en la reunión del Comité en mayo de 1978 le suministre oralmente precisiones sobre la evolución de la situación y las perspectivas de un rápido retorno a una vida sindical normal;
- f) que invite además a las organizaciones querellantes con estatuto consultivo ante la OIT a dar informaciones orales en ocasión de esta reunión;
- g) que tome nota de este informe provisional.

Fecha: Ginebra, 23 de febrero de 1978. Firmado: Roberto Ago, Presidente"

5. NUEVO EMBAJADOR
DEL GRAL. PINOCHET.

El 15 de febrero llegó a Montevideo el nuevo embajador de la Junta Militar chilena en el Uruguay, Gral. Gustavo Alvarez Aguila, quien pocos días después presentó sus credenciales al Dr. Aparicio Méndez.

El Gral. Alvarez sustituye al Brigadier Odlandier Mena Salinas, que hace algunos meses fue llamado a su país para hacerse cargo del "Centro de Información Nacional" (CIN), órgano de inteligencia de la Junta Militar chilena que reemplazó, con otro nombre pero con idénticas funciones, a la desprestigiada DINA.

6. LA MUERTE DE NORMA CEDRES DE IBARBURU. El 16 de enero falleció en el Hospital Militar Norma Cedrés de Ibarburu, de 45 años, que se encontraba detenida por razones políticas desde octubre de 1975. En diciembre la guardia del Penal de Punta Rieles había informado a las reclusas de ese establecimiento que Norma Cedrés de Ibarburu había intentado suicidarse, colgándose en un baño, y que había tenido que ser trasladada al Hospital Militar para su atención médica. Ninguna detenida había sido testigo de estos hechos.

Norma Cedrés de Ibarburu, militante de larga trayectoria, ex empleada del diario "El Popular", había sido ferozmente torturada luego de su detención.

7. DELICADO ESTADO DE SALUD DEL GRAL. VÍCTOR LICANDRO. Informaciones procedentes de Montevideo indican que el Gral. Víctor Licandro, detenido desde el 9 de julio de 1973, se encuentra en carpa de oxígeno, debido a una crisis asmática sufrida a consecuencia de las duras condiciones de reclusión que soportó. El Gral. Licandro fue uno de los pocos militares uruguayos que se retiraron del ejército a principios de la década del 70 para no cumplir las funciones represivas que en esa época se encomendaron a las fuerzas armadas. Posteriormente se incorporó al Frente Amplio, desempeñándose, conjuntamente con el Cnel. Carlos Zufriategui, en la Secretaría del Gral. Líber Seregni. Seregni, Licandro y Zufriategui fueron detenidos en oportunidad de la manifestación contra el golpe de Estado.

El agravamiento del estado de salud del Gral. Licandro fue denunciado el 28 de febrero ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reunida en Ginebra, mencionándose asimismo la situación de otros presos políticos uruguayos que se encuentran en peligro de vida debido a la gravedad de su salud y a las condiciones de reclusión. En esa situación se encuentran, entre otros, el Prof. Raúl Cariboni, Daymán Cabrera Sureda, el Dr. Hugo Fabbri y Elena Curbelo de Mirza.

8. DETENCIONES. Trascendió que entre los docentes universitarios detenidos a principios de enero y procesados por la justicia militar por el delito de "escarnio" debido a intervenciones que realizaron en órganos de gobierno de la Universidad (ver "Informaciones", No 79) figuran, además del Dr. Julián González Methol, los Dres. Salerno, Manfredi y Carlos Sanguinetti, de la Facultad de Odontología, y los profesores Jorge Bossi (docente de geología), Pablo Ross (docente de forestación), Morelli y Ricardo Claramount, de la Facultad de Agronomía. Algunas de las intervenciones de estos docentes que la justicia militar ha considerado en 1978 agraviantes para las Fuerzas Armadas fueron realizadas en los años 1968 a 1970; una de ellas fue hecha en 1963.

Asimismo se denunció que entre las personas detenidas a fines de noviembre y principios de diciembre en Montevideo (ver "Informaciones", Nos. 78 y 79) figuran: José Pedro Márquez (obrero textil de la fábrica "Alpargatas"), Roque Méndez (de 45 años, obrero textil de "La Aurora"), Ernesto Echeveste García (obrero textil de COTEX), Juan Machín (de 42 años, obrero de la construcción), Ana Escande de Rodríguez (de 25 años, casada, con un hijo, estudiante), Tierno Goianni (obrero metalúrgico), y Walter Chiappe (de 34 años, obrero de la construcción).

En los primeros días de marzo fueron detenidos Mario Bentancour (funcionario del CASMU) y Ana Ferreira.

9. URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA; SIETE CASOS MAS. El 24 de diciembre pasado, efectivos del ejército argentino allanaron la vivienda de Miguel Angel Rfo Casas, uruguayo, de 29 años, radicado en la capital argentina; prendieron fue go a sus pertenencias y lo llevaron detenido. Desde entonces, sus familiares no han vuelto a tener noticias suyas.

En esos mismos días fue detenido Ataliva Castillo, militante de larga trayectoria sindical y política que, en 1961, había fundado, junto con Raúl Sendic, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA). Las autoridades argentinas tampoco lo han reconocido como detenido.

También en los últimos días del año pasado fueron detenidos en Buenos Aires Gustavo Goicochea (ex trabajador de Bao) y Gustavo Arce (obrero textil que en Montevideo había trabajado en "Alpargatas"). Tampoco han dado resultado alguno las gestiones tendientes a ubicar el lugar de detención de ambos.

El 19 de febrero, Elsa Altuna, ex secretaria general de la Asociación de la Prensa Uruguaya, que residía en Buenos Aires desde 1976, salió de su domicilio hacia las oficinas de Migraciones, donde debía realizar un trámite. Desde entonces no se ha sabido nada de ella. Sus familiares presentaron un recurso de habeas-corpus, sin que las autoridades argentinas admitieran su detención. Elsa Altuna había sido querida en el Uruguay y el comunicado correspondiente de las Fuerzas Conjuntas estaba en poder de las autoridades policiales argentinas.

Asimismo se conocieron los nombres de otros dos uruguayos desaparecidos en la Argentina en 1977. Se trata de Fernando Moretti Franco, detenido en el mes de agosto, y Elba Lucía Gandara Castromán, detenida en febrero, es decir hace más de un año.

Elba Lucía Gandara fue arrestada en su domicilio en la madrugada del 18 de febrero de 1977 por oficiales del Ejército y la Policía argentinos, conjuntamente con su compañero, Juan Enrique Velázquez Rosano, obrero frigorífico. Luego de haber estado recluido en dependencias policiales y militares, donde ambos fueron objeto de brutales torturas en las que participaron oficiales uruguayos, Juan Velázquez fue liberado y tiempo después viajó a Europa como refugiado, en compañía de los cuatro hijos de la pareja (el mayor de 12 años y la menor, en el momento de la detención, de apenas 20 días). En oportunidad de uno de los interrogatorios, Velázquez había podido ver a su compañera, pero desde entonces no ha tenido más noticias de ella. Al recuperar su libertad, las autoridades militares le dijeron que se olvidara de su mujer, ya que no volvería a verla.

10. FLAVIO TAVARES FUE EXPULSADO DEL URUGUAY Y DECLARO QUE HABIA RECIBIDO UN TRATAMIENTO BRUTAL DURANTE SU DETENCION.

El 23 de enero el periodista brasileño Flavio Tavares, que había sido excarcelado 17 días antes, fue notificado por autoridades policiales de que debía abandonar

territorio uruguayo en el plazo de 24 horas. Viajó a Portugal en compañía del director del diario brasileño "O Estado de Sao Paulo", y una vez en Lisboa formuló declaraciones sobre su detención en el Uruguay. "Se me aplicó un tratamiento brutal, sólo posible en países en los que no rigen los principios democráticos", afirmó Tavares. Y añadió: "Se dijo que yo estaba en un confinamiento solitario, pero era mucho peor que eso. El miedo en el Uruguay es una constante. La gente no sólo teme hablar, sino también escuchar".

11. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CAZA DE BRUJAS: CREAN "TRIBUNALES DE HONOR" PARA LOS PROFESIONALES.

El 9 de febrero el Poder Ejecutivo remitió al Consejo de Estado un proyecto de ley que dispone la creación, en el ámbito

del Ministerio de Justicia, de "tribunales de honor" para cada una de las profesiones universitarias, con el cometido de juzgar, desde el punto de vista ético, la conducta de los profesionales. Los cinco miembros de cada tribunal serán designados, según dicho proyecto, por el Poder Ejecutivo: el presidente por designación directa; el vicepresidente a propuesta del Rector Interventor de la Universidad; y los otros tres miembros, serán seleccionados de una lista de 10 candidatos que cada una de las asociaciones profesionales deberá presentar al Poder Ejecutivo. Los fallos de estos tribunales podrán consistir en una absolución, una sanción leve (acompañada con una exhortación), una amonestación (con apercibimiento), o en la descalificación del profesional (por un período de hasta 15 años). Las sanciones serán homologadas por el Poder Ejecutivo, que será además quien decida si cada fallo se dará o no a publicidad.

Corresponde señalar que las asociaciones profesionales cuentan con tribunales de honor para juzgar el comportamiento ético de sus afiliados. Es evidente, pues, que el proyecto de ley -al cual el Poder Ejecutivo atribuye gran importancia y dio carácter de urgente, disponiendo el levantamiento del receso del Consejo de Estado para su consideración- está encaminado a colocar esa atribución -la de juzgar la ética profesional- en la órbita del Poder Ejecutivo.

El proyecto de ley no prevé normas precisas de procedimiento ni de prueba para determinar cuándo un profesional ha actuado al margen de la ética, sino que establece que los tribunales actuarán por convicción. Dice, al respecto, el artículo 10 del proyecto: "Se pronunciarán de acuerdo con la convicción moral que cada uno de sus integrantes se haya formado sobre la cuestión sometida a su consideración, valorando la conforme a estados firmes de la conciencia colectiva propia de nuestro país."

12. ESTAFA A LOS TRABAJADORES: PROPONEN ELIMINAR EL BENEFICIO DEL RETIRO.

El 2 de febrero el Poder Ejecutivo remitió al Consejo de Estado un proyecto de ley

por el que se elimina el beneficio retiro que percibe todo trabajador al obtener su jubilación. Dicho beneficio existía desde 1951 para los funcionarios públicos y desde 1953 para los trabajadores de la industria y el comercio. Su importe se determinaba en base a los años de servicio que sumara el beneficiario. Sin embargo, ya en 1974 la dictadura, por medio de un decreto, había fijado un tope de N\$ 150 para dicho beneficio, cualesquiera hubieran sido el salario y los años de actividad. Ese tope representaba actualmente menos del 50 por ciento del sueldo mínimo; ahora, mediante este proyecto de ley, la dictadura pretende eliminar totalmente el beneficio.

En caso de aprobarse el proyecto de ley, se consumará una verdadera estafa a los trabajadores. En efecto, la legislación que estableció este beneficio jubilatorio para los distintos sectores de la actividad laboral previó las fuentes de recursos para pagarlo. Una de esas fuentes era un descuento que se practicó desde entonces a todos los sueldos, que se sumaba al que se practicaba para la jubilación en sí. El proyecto de ley no prevé ni la devolución del descuento ya efectuado ni la suspensión, para el futuro, de ese descuento; por el contrario, establece que el mismo se seguirá practicando y que se le dará otro destino.

13. LOS RELEVOS EN LAS FUERZAS ARMADAS.

El 19 de febrero el General Gregorio Alvarez pasó a ocupar la Comandancia en Jefe del Ejército, con el grado de Teniente General.

Había sido designado para ese cargo por la Junta de Oficiales Generales del Ejército el 18 de enero. Si bien en un discurso el propio Alvarez subrayó que la elección se había producido por unanimidad, la información oficial no hacía constar tal grado de acuerdo a nivel castrense, omitiendo todo detalle sobre las deliberaciones. Según versiones oficiosas no habría existido tal unanimidad, sino que en principio se habría registrado un empate entre Alvarez -a quien correspondía el cargo por antigüedad- y otro general. Finalmente, según esas versiones, quienes en un principio se oponían a la designación de Alvarez lo habrían aceptado en base a una serie de compromisos que incluirían, en primer lugar, "el mantenimiento del vigor de la lucha antisubversiva" y "el respeto del calendario electoral fijado por las Fuerzas Armadas".

De conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica Militar, el Teniente General Alvarez sólo podrá actuar un año como Comandante en Jefe del Ejército, ya que si bien está lejos del límite de edad previsto (tiene 52 años), deberá pasar a retiro el 19 de febrero de 1979, al cumplir ocho años en el grado de general.

En la misma reunión del 18 de enero, la Junta de Oficiales Generales del Ejército dispuso, por designación directa ("selección") el ascenso al grado de General de los Cneles. Iván Paulós, que se desempeñaba como Presidente del Directorio Interventor de AFE, y Holmes Coitiño, que era Director de Tiro y Educación Física del Ejército.

La Junta de Oficiales Generales volvió a reunirse a mediados de febrero. En esa oportunidad, designó al Gral. Julio César Rapela, que se desempeñaba como Jefe de la Casa Militar, para ocupar a partir de abril la jefatura del Estado Mayor Conjunto (ESMACO), actualmente a cargo del Contralmirante Francisco Sangurgo. Se trata de un cargo rotativo en el cual se alternan, cada dos años, oficiales superiores del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Hasta ahora los jefes del ESMACO han sido el Gral. Gregorio Alvarez (1972-74), el Brigadier José Cardozo (1974-76) y el Contralmirante Francisco Sangurgo (1976-78).

En la misma reunión, la Junta de Oficiales Generales del Ejército designó al Gral. Abdón Raymúndez, que se desempeñaba como Presidente del Directorio Interventor del Banco República, para sustituir al Teniente General Alvarez en la jefatura de la División de Ejército IV, con asiento en la ciudad de Minas; al Gral. Iván Paulós como Director del Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES) y al Gral. Holmes Coitiño como Jefe de la Casa Militar, en sustitución del Gral. Julio César Rapela.

Por su parte, el 18 de enero la Junta de Oficiales Generales de la Fuerza Aérea ascendió al grado de Brigadier General al Brig. Raúl Ben dahan y lo designó Comandante en Jefe, cargo que ocupa desde el 23 de ese mes, en sustitución del Brigadier General Dante Paladini, que pasó a retiro. En la misma reunión fue ascendido a Brigadier el Cnel. (PAM) Manuel Buadas, que se desempeñaba como Director General Interventor de PLUNA. El nuevo Comandante en Jefe tendrá que designar al Vicecomandante de la Fuerza Aérea, para lo cual deberá elegir entre los cuatro Brigadieres: José Cardozo, Jorge Borad, José P. Jaume y Manuel Buadas.

14. FERREIRA ALDUNATE: NO HABRA DIALOGO
CON MILITARES MIENTRAS SUBSISTA LA
PROSCRIPCION DE PARTIDOS O PERSONAS.

En entrevista concedida en Londres el 9 de febrero a la agencia de noticias "Interpress Service", el principal dirigente del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, afirmó:

"En nombre del Partido Nacional, puedo decir terminantemente que con nosotros no se ha contado ni se cuenta ni se contará jamás para ninguna solución, o intento de solución, aproximación o intento de aproximación, que reposen sobre la exclusión de ningún ciudadano de mi patria o de sus derechos políticos, ni sobre la exclusión de ningún partido político de la vida nacional, ya sea que esté ideológicamente cerca nuestro o en las antípodas". Y añadió: "Democracia hay o no hay. No aceptamos soluciones fuera de la más absoluta y total restitución () las libertades públicas y de los derechos civiles; esto no es negociable. No es un problema político; es un problema de decencia y de fidelidad al país. Los militares, pues, podrán seguir probando las fórmulas que se les ocurran, pero será sólo entre ellos; con el pueblo del Uruguay no van a contar jamás."

Ferreira, que no hizo ningún comentario sobre la sustitución del Gral. Vadora por el Gral. Alvarez en la Comandancia en Jefe del Ejército, señaló más adelante: "Hay divergencias profundas entre los militares, pero no por razones ideológicas, sino por rivalidades de carácter personal. El régimen siempre fue débil. Careció de todo apoyo civil y ni siquiera intentó crearlo. Opera exclusivamente por orden de los cuarteles, y eso no se disimula con el aparato civil que aparece teóricamente a la cabeza del Estado". Refiriéndose a la posibilidad de que un sector de militares se uniese a las filas del pueblo, Ferreira sostuvo que "no sólo es posible sino necesario que aparezcan en el ejército uruguayo quienes quieran al menos impedir la destrucción de las fuerzas armadas nacionales". Y aclaró inmediatamente: "Ese sector progresista o aperturista no será nunca encabezado por los generales, brigadieres y almirantes que nos llevaron a esta vergüenza nacional."

Ferreira Aldunate se refirió también a la situación económica. "El régimen uruguayo está políticamente desacreditado y económicamente muy débil; sólo puede mantenerse por el imperio renovado del terror", sostuvo, destacando que "las fuerzas militares de ocupación han endeudado desmesuradamente al Uruguay para pagar el aparato represivo" y que el país "se ha descapitalizado, ha desinvertido; las tasas de versión no han alcanzado el mínimo necesario para amortizar la deuda externa. Para pagar ésta, tiene que seguir pidiendo prestado, y como el déficit del comercio exterior es endémico, el Uruguay como país está en un callejón sin salida y el régimen militar condenado, a la corta o a la larga". Subrayó asimismo que "el Uruguay exporta medio millón de desocupados y tiene una tasa de desempleo del 12,8 por ciento, lo que significa, dada la estructura familiar uruguaya, casi la misma proporción de familias totalmente destituidas."

Al finalizar sus declaraciones, Ferreira aludió al carácter favorable de la coyuntura internacional. Dijo que "una miseria agobiante y un régimen de terror sin paralelos favorecen temporariamente al régimen. Hasta que se produzca un inevitable estallido, favorecido incluso por causas ajenas al proceso uruguayo."

15. VEGH VILLEGAS SOSTIENE
QUE EL PRESIDENTE DE 1981
DEBERIA SER UN MILITAR.

El 28 de enero el diario argentino "La Opinión" publicó una entrevista al Ing. Alejandro Végh Villegas, reproducida días después en la prensa uruguaya. Se

transcriben a continuación los principales pasajes de las declaraciones del ex Ministro de Economía y Finanzas y actual consejero de Estado de la dictadura.

"Más que demócrata, me considero liberal. ... En la actitud de los civiles que estamos colaborando con el actual proceso hay algo más que una simple aceptación de la realidad. Existe una fe en el valor de los principios que orientan la acción renovadora de las Fuerzas Armadas, más allá de las imperfecciones y de los tropiezos que son propios de toda acción humana."

"Yo creo en la economía de mercado porque me parece más eficiente que la socialista, y los hechos lo vienen demostrando. ... (En el Uruguay) hay que profundizar la liberalización en lo político y en lo económico. En lo político, deberá permitirse una mayor libertad de expresión y de información, para que la ciudadanía pueda discurrir, con mejores elementos de juicio, los grandes problemas que se plantean a la Nación en un futuro próximo. Solamente con un grado elevado de participación ciudadana podrá obtenerse la consolidación del proceso renovador de la vida política."

"No es tan difícil la distinción (entre el subversivo y el disidente). Si se examina con cuidado el fenómeno de degradación de nuestras repúblicas, se advierte que no hubo una insuficiencia de normas legales, sino que faltó autoridad para aplicarlas. Había ocasiones evidentes en que las proclamas de los activistas constituían una incitación a delinquir, en la definición del Código Penal. Y, sin embargo, el Ministerio Público no actuaba y se producía una capitulación gradual del Estado ante los grupos de presión en general y ante la izquierda subversiva en particular. Con algunas excepciones, por supuesto, entre las que cabe destacar la actitud valiente del presidente Pacheco."

"No tengo ideas precisas en el momento actual (sobre las medidas que deben adoptarse para ir restableciendo la plena libertad de acción de los partidos políticos). Estimo que sería útil, en un tiempo no muy distante, la formación de ateneos o centros de discusión donde se planteen las grandes cuestiones nacionales en los campos político, económico y social. Inclusive podría pensarse en un centro bipartidario donde pueda llegarse a un consenso entre hombres del Partido Colorado y del Partido Nacional, que serviría como etapa de preparación de los próximos gobiernos, que deberán ser, necesariamente, de coalición o de coparticipación en el poder de los dos grandes partidos, para fortalecer el proceso de transición."

"Sin duda que sí, (que es posible, en la práctica, que los partidos históricos coincidan en una fórmula presidencial común y que esa coincidencia se dé en el plano de una convergencia cívico-militar). La historia muestra varios ejemplos similares. ... (También existen) ricos antecedentes en nuestro pasado. ... Nuestros partidos políticos nacieron en el crisol militar. ... Artigas, Oribe, Rivera, Lorenzo Batlle y Timoteo Aparicio eran generales. ... El General Máximo Tajes condujo a la restauración institucional luego de los gobiernos militares de Latourette y Santos. Y ya en nuestro siglo fueron presidentes, no hace mucho tiempo, los Generales Baldomir y Gestido. De modo que no hay nada nuevo en lo que está sucediendo y en lo que se sugiere."

Estas últimas palabras —"lo que se sugiere"— no se refieren a otra cosa que a la conveniencia de que sea un militar el presidente designado en 1981. Así lo confirman la siguiente respuesta de Végh Villegas ("tendrá que haber un acuerdo entre los líderes de los partidos tradicionales y los jefes militares que conduzcan el proceso de transición") y, sobre todo, su aprobación a la siguiente síntesis que de sus declaraciones hizo el periodista que lo entrevistaba: "Luego de un período de suspensión de algunas reglas de juego, la plenitud del orden democrático debería atravesar una transición a través de un militar que fuera presidente constitucional y que tuviera en una misma mano la ley y la fuerza". "Es lo razonable", respondió Végh Villegas.

El diario "El Día", al comentar, en su página editorial, la tesis de Végh Villegas según la cual "los próximos gobiernos deberán ser, necesariamente, de coalición o de coparticipación en el poder de los dos grandes partidos, para fortalecer el proceso de transición", se pregunta "qué oposición habría o dónde estaría esa oposición, democráticamente necesaria, en el esbozo que formula". Y añade "El Día": "Aun en períodos de transición asignamos a todo gobierno nacional de coalición, esto es, donde coparticipen por entero ambos grandes partidos nacionales, el grave riesgo de dejar de lado la alternativa democrática que toda democracia requiere. ... El gobierno preconizado por el Ing. Végh Villegas es un gobierno sin oposición. ... Al carecer de contrapartida, un gobierno tal —y más aún en la medida en que tuviera que adoptar una estrategia patriótica y por tanto severa— dejaría clausurada la posibilidad de crecimiento de una fuerza democrática adversa capaz de sustituirlo en el juego libre de las alternativas electorales limpias. ... (Blancos y colorados) podemos llegar a acuerdos sobre puntos concretos y por plazos que, en la medida que supongan concordancia institucional, pueden ser prolongados; pero que, referidos a tareas concretas de gobierno, sólo pueden ser muy breves. Los gobiernos de Tajes o Baldomir, para mencionar dos gobiernos que protagonizaron etapas de transición y que el propio Ing. Végh cita, contaron, en sus respectivos períodos, con el complemento de fuerzas opositoras que hacían sentir sus planteamientos críticos y que, lejos de ser temibles, deben ser deseables, desde que en última instancia permiten que un sistema abarque la conciencia total de un país y lo conduzca, de algún modo, en el sentido que el equilibrio o resultante de las corrientes predominantes indica."

16. DESIGNACIONES. El Cnel. Bernardo Paz fue nombrado Director Intendente de la Dirección Nacional de Migración, en sustitución de Ernesto Castaldi, que se jubiló. El Cnel. Paz era ayudante militar del Ministro del Interior.

El Teniente Coronel Enrique González Lence fue designado ayudante militar del Ministro del Interior.

El Dr. Ruben Gayol fue nombrado Inspector General de Trabajo y Seguridad Social, en sustitución de José A. Barrios, que renunció. El Dr. Gayol conservará su cargo actual de vicepresidente del Directorio Interventor de Asignaciones Familiares, integrado además por el Cnel. Eugenio Ibáñez, que lo preside, y el Cdor. Luis Givogre.

Edmundo Narancio viajó a Nueva York a principios de febrero y presentó sus credenciales al Secretario General de las Naciones Unidas como Embajador permanente del Uruguay ante la sede de dicha organización.

17. DOCUMENTO DEL PENTAGONO CONFIRMA SUSPENSION DE AYUDA MILITAR NORTEAMERICANA Y REVELA QUE LA DICTADURA URUGUAYA QUERIA TENER MUNICIONES DE FOSFORO BLANCO, CUYO USO ESTA PROHIBIDO.

La "Oficina de Washington para América Latina" (WOLA), organización privada que integran

iglesias, núcleos académicos y otras instituciones norteamericanas, dio a conocer el texto de una carta dirigida el 30 de junio del año pasado por el Mayor General Richard D. Cavazos, Director de la Región Interamericana del Pentágono, al Gral. Luis Queirolo, Agregado Militar en la Embajada uruguaya en Washington. La legislación norteamericana impone a las oficinas gubernamentales la obligación de dar a conocer su documentación, y la carta fue entregada a la WOLA junto con otros documentos burocráticos sin importancia relativos a las relaciones entre las fuerzas armadas norteamericanas y uruguayas.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la carta, que desmiente las afirmaciones de jerarcas militares uruguayos según las cuales las relaciones con sus colegas norteamericanos serían excelentes, reafirma la coincidencia del Pentágono con el Departamento de Estado en cuanto a la situación de los derechos humanos en el Uruguay (véanse las declaraciones del Gral. McAuliffe en el Nº 79 de "Informaciones"), revela que los militares uruguayos querían disponer de fósforo blanco, cuyo empleo está prohibido por convenios internacionales, y señala los canales -diplomáticos y no militares- que los Estados Unidos consideran oportunos para las comunicaciones entre ambos gobiernos.

"Estimado General Queirolo:

Aprovecho esta oportunidad para reiterarle mi sincero agradecimiento por haber tenido el gusto de hablar con Vd. y con el Cnel. Tito, a fin de intercambiar ideas sobre los muy importantes temas que discutimos en su oficina. Sigo creyendo que este tipo de franco intercambio de ideas contribuye a solucionar felizmente los problemas y es el que los soldados profesionales acostumbramos a tener.

Al final de nuestra conversación, Vd. me dijo que lamentaba que otros altos oficiales del gobierno uruguayo no hubieran tenido oportunidad de escuchar mis puntos de vista. Se me ocurrió entonces enviarle esta carta, en la que vuelvo a exponer mis puntos de vista en esa reunión. Como Vd. recordará, muchas de mis opiniones consistieron en estimaciones personales sobre lo que deparará el futuro.

Sobre el tema de su pedido de armamento para el Ejército uruguayo para 1978, he confirmado nuevamente que existe una prohibición general de proveer a cualquier país fósforo blanco. Tampoco, en mi opinión, será aprobada cualquier solicitud relativa a armas que pudieran emplearse para la seguridad interna o el mantenimiento del orden, como los revólveres 38 especial. A mi juicio, es difícil que se apruebe la venta y embarque de las armas contenidas en su lista antes de que se resuelva el problema de los derechos humanos en su país.

Creo que nuestra conversación sobre las dificultades internas que han tenido nuestros países en los últimos años contribuyó enormemente a un mutuo entendimiento. Para mi país, las consecuencias de Watergate y de Vietnam están estrechamente relacionadas con la actual postura de los Estados Unidos en materia de los derechos humanos y con nuestro intento de volver a nuestros valores morales básicos. Del mismo modo, me consta que la experiencia del Uruguay con los tupamaros y su prolongada crisis económica son factores importantes que han condicionado al gobierno de su país en la forma de enfrentar los problemas del Uruguay.

Corresponde a los gobernantes del Uruguay decidir la forma de resolver los problemas de ese país en relación con los derechos humanos. Personalmente, creo que lo que su Gobierno debería hacer es tomar la iniciativa, adoptando medidas internas que vayan mucho más allá de lo que los opositores reclaman. Esa actitud reafirmaría ante el mundo la vigencia de la democracia en el Uruguay y demostraría su capacidad para resolver sus problemas de modo aceptable para la comunidad internacional. A mi juicio, las posibilidades de aprobación de su solicitud de armamento dependerá totalmente de las medidas que su gobierno adopte para mejorar la situación de los derechos humanos.

Como le he manifestado, creo que ha habido malas interpretaciones sobre el grado de apoyo a los derechos humanos en los Estados Unidos, y no les ayudaría en nada —ni a Vd. ni a sus compatriotas— si no dejase bien en claro esta cuestión. El apoyo de los Estados Unidos a los derechos humanos no es únicamente de un reducido número de congresistas liberales; es el pueblo norteamericano en su conjunto, la gran mayoría del Congreso y la Administración —incluidos el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa— que están comprometidos en la defensa de la causa de los derechos humanos en todo el mundo.

Lamento mucho que pronto tenga que abandonar mi cargo y no pueda, en consecuencia, mantener este contacto personal con Vd. El Coronel Tomas permanecerá en esta Oficina y estará a su disposición para reunirse con Vd.

Le agradezco su amable recibimiento y la oportunidad de mantener estas conversaciones. Nuestro propósito es el de reforzar los lazos de amistad y entendimiento que han mantenido nuestros gobiernos y nuestros pueblos en los últimos años. Confío en que serán el Ministerio de Relaciones Exteriores (del Uruguay) y el Departamento de Estado (norteamericano) los principales canales de comunicación a ese respecto.

Le saluda sincera y respetuosamente

Richard E. Cavazos
Mayor General de los EEUU
Director de la Región Interamericana"

18. ENSEÑANZA MEDIA: DISMINUCION DE INGRESOS Y EMIGRACION DE ALTO PORCENTAJE DE EGRESADOS.

Según datos del Consejo Interventor de Enseñanza Secundaria, en los tres últimos años se ha registrado un descenso en el número de

alumnos inscritos para ingresar al ciclo básico en los liceos oficiales. En 1975 los nuevos alumnos fueron 26 mil 848; en 1976, 25 mil 195 y en 1977, 24 mil 943.

Por otra parte, la misma fuente informó que el 20,16 por ciento de los estudiantes egresados en 1976 solicitaron pases para continuar sus estudios en el exterior, y que en 1977 ese porcentaje se situó en el 15,23 por ciento.

Mientras tanto, a nivel universitario, al iniciarse el nuevo año lectivo fueron cuatro los centros de estudios que limitaron el ingreso de alumnos: dos facultades (Medicina y Odontología) y dos escuelas universitarias (Sicología y Colaboradores de médico).

Espacio reservado a las organizaciones políticas

El 20 de diciembre, al vencer el plazo fijado en el N° 76 de "Informaciones" para el envío de materiales sobre el tema de "la unidad en la hora actual", el GRISUR sólo había recibido un trabajo. Además, antes de esa fecha, una organización que había enviado un material sobre el tema anterior de esta Sección, pidió una prórroga del plazo para hacernos llegar su posición.

El único trabajo recibido no está firmado por una organización política, sino por un "núcleo de militantes" que se identifican como "provenientes de distintos grupos del Frente Amplio, y específicamente de la Corriente, que o bien se han alejado de sus grupos de origen —en algún caso el grupo ha desaparecido como tal después del golpe de Estado— o bien mantienen vinculaciones débiles e irregulares con sus grupos por los problemas de comunicación y dispersión existentes aún hoy en el exilio".

Si bien al inaugurar la Sección no se previó la publicación de trabajos que no estuviesen firmados por organizaciones políticas, el GRISUR ha decidido publicar este material. Se ha tenido en cuenta, en primer lugar, que la Sección se creó para atender una necesidad —la de contar con un marco de discusión y reflexión políticas— que las organizaciones, con una sola excepción, no han considerado oportuno tener en cuenta, por razones que no es del caso examinar aquí. En segundo lugar se entendió que la inclusión de un texto presentado por un núcleo de militantes y no por una organización no constituiría un precedente para la Sección por cuanto el GRISUR, ante la falta de respuesta de las organizaciones políticas en general, ha decidido suspender la Sección.

Se publicará, eso sí, el trabajo de la organización que solicitó una prórroga del plazo, siempre que llegue antes de fin de mes.

La unidad en la hora actual

Núcleo de militantes
27 de junio de 1973

La decisión de revitalizar la actividad del Frente Amplio y, más recientemente, el llamado conjunto de diferentes personalidades y grupos de la izquierda para conformar la más amplia unidad antidictatorial, han suscitado diversas reacciones y contra-reacciones en los medios militantes que, paradójicamente, parecen poner en peligro nuevamente la necesaria reorganización y unidad de las fuerzas populares, que todos los sectores compartimos calurosamente.

Claro, no se trata de hacernos los ingenuos frente a los acontecimientos. Están en juego cuestiones muy importantes para el movimiento obrero y popular uruguayo, como la de determinar el carácter y la forma del proceso de unidad, lo que está indisolublemente unido al análisis de la situación actual y sus alternativas políticas, a la existencia de diferentes concepciones político-ideológicas en el seno de la izquierda, etcétera.

La dictadura y sus alternativas

El ascenso de las luchas obreras y populares y la crisis del sistema de dominación del capitalismo dependiente en el Uruguay —crisis del modelo nacional-desarrollista, del populismo y la democracia burguesa, como sus expresiones políticas e institucionales— condujo a la instauración de la dictadura tutelada directamente por las Fuerzas Armadas, como institución salvaguarda del Estado burgués, expresión política de la alianza de la oligarquía monopólica y el imperialismo norteamericano.

La implementación del nuevo modelo de acumulación capitalista, en el marco de la más aguda crisis general del sistema después de la recesión de los años 30, implica un violento proceso de reconcentración monopólica y extranjerización de la economía, la ruina de la débil burguesía industrial y agraria nacional, la imposición de condiciones de super-explotación a la clase obrera y la miseria de las más amplias capas del pueblo. La resolución de las profundas contradicciones económicas y sociales que este proceso genera, requiere la implantación de un Estado policial, basado en el terrorismo y la represión sistemáticos, de corte fascizante.

La forma prolongada de la crisis actual del sistema capitalista mundial y las limitaciones estructurales de la economía uruguaya dificultan la transición y consolidación del nuevo modelo, acentuándose las contradicciones internas del bloque en el poder que, junto con el descontento generalizado de las masas, generan una situación de permanente inestabilidad política, expresada en las sucesivas crisis internas de la dictadura. Sin embargo, ni el régimen se liquidará por sí solo, como creen algunos —por el contrario, se insinúan diferentes alternativas tendientes a perpetuarlo— ni el malestar y la miseria del pueblo generarán, espontáneamente, el movimiento capaz de derrocarlo.

Frente a la alternativa actual, consistente en la institucionalización de una dictadura de ultraderecha al estilo de Paraguay, Brasil o Chile, han surgido alternativas de recambio que no cuestionan la esencia de los cambios operados, ni la base de clase del régimen. Se plantean una "liberalización" relativa de los aspectos más resistidos y cuestionados de la dictadura, buscando acelerar el retorno al régimen de partidos políticos y elecciones, aunque en un marco más restrictivo que en el pasado y con la participación de las Fuerzas Armadas: la llamada "democracia viable".

No obstante, nada es seguro y fácil en estos momentos. Las clases dominantes tienen un gran temor de que cualquier "apertura", por reducida que ella sea, dé margen para el fortalecimiento de las fuerzas populares y un ascenso de las luchas, lo que se traduce en la persistencia de los golpes represivos y el absoluto bloqueo de todas las formas de participación política. En definitiva, la oligarquía y el imperio siempre prevén más de una alternativa para perpetuarse en el poder; ninguna de ellas representará una solución a los problemas del pueblo y es necesario estar alerta para que cualquier cambio en esta dirección no tome por sorpresa a las fuerzas populares y revolucionarias.

La variante nacional-reformista

A pesar del ineluctable deterioro y transformación sufridos en la última década por el sistema demo-liberal uruguayo, las dificultades de la dictadura y su incapacidad para generar, en el corto plazo, una mínima base de apoyo social, renuevan las expectativas políticas de

los sectores nacional-burgueses desplazados, hacia una salida que intente la recuperación económica del país mediante una política de independencia y equidistancia de las grandes metrópolis, en un marco de mayor bienestar y libertades para el pueblo en general.

Estos sectores —políticamente expresados por Ferreira Aldunate y algunos mandos militares, a quienes se atribuyen posturas "peruanistas"— no se plantean el derrocamiento violento de la dictadura a través de la lucha obrera y popular, porque esto podría cuestionar la viabilidad de su proyecto. Su táctica consiste, por un lado, en aprovechar las contradicciones y debilidades del actual bloque en el poder y, por el otro, en capitalizar el descontento popular, debilitar y dividir a las fuerzas revolucionarias para subordinar al movimiento obrero-popular a su estrategia. En condiciones de debilidad, estos sectores no vacilarán en sumarse a cualquier alternativa de recambio de la dictadura, con la esperanza de mejorar sus posiciones.

En lo esencial, esta nueva versión del proyecto nacional-burgués sólo tiene posibilidades de vigencia coyuntural —en el marco de las contradicciones inter-imperialistas, incluso aprovechando el comercio con el campo socialista— ya que es intrínsecamente incapaz de desarro llar un modelo capitalista autónomo de los centros imperialistas. Pueden ser utilizados, sin embargo, ante el crecimiento de la resistencia obrera y popular, como un muro de contención ante probables salidas revolucionarias, como factor diversionista en las propias filas del pueblo.

Por todo ello, sería un profundo error subordinar la acción de las fuerzas populares a estas alternativas: significaría una nueva ilusión que culminaría con una frustración mayor de los justos anhelos de liberación del pueblo. Esto no puede llevar a despreciar, en lo táctico, el carácter más progresista de estos sectores, ni a desaprovechar las conquistas que puedan obtenerse bajo un gobierno con tales características, por efímero que sea. Pero el objetivo central debe ser mantener la independencia política de la clase obrera y el pueblo para, en el momento de la inevitable claudicación del nacionalismo-burgués, estar en condiciones de avanzar más fortalecidos hacia la definitiva liberación.

Las opciones en el campo del pueblo

La toma del poder por la clase obrera y el pueblo constituyen el objetivo estratégico fundamental de las fuerzas revolucionarias en la actual etapa de lucha anti-imperialista y antioligárquica en camino al socialismo. El objetivo del período actual es el derrocamiento de la dictadura, avanzando lo más lejos posible en la creación de las condiciones para el logro del objetivo estratégico. Sólo de esa manera, si la caída de la dictadura no coincide con el triunfo del poder obrero-popular, se habrán dado avances efectivos.

Algunas posiciones sostienen que la simple caída de la dictadura —o la derrota del "fascismo"— es ya un avance hacia los objetivos de la etapa de liberación. O, expresado de otra manera: un "requisito previo de todo adelanto futuro, de toda opción democrática avanzada y anti-imperialista y, muchísimo más, de ulteriores postulados socialistas", al decir de Rodney Arismendi. En concordancia con ello, se postula como punto central de la plataforma antidictatorial "el retorno al sistema democrático y republicano de gobierno", o sea a la democracia burguesa.

La clase obrera y el pueblo uruguayo ya han experimentado, amargamente, adónde conduce la táctica de apostar a la "menos mala" de las

alternativas que se juegan en el campo de la burguesía; a no otra cosa que postergar indefinidamente el desarrollo independiente de su propia alternativa, la única consecuentemente democrática, anti-imperialista y capaz de levantar al país. Las debilidades momentáneas de las fuerzas populares no pueden ocultarnos que la dictadura surge como reacción al ascenso de las luchas de la clase obrera y el pueblo, como un remedio forzado ante el fracaso histórico de la democracia burguesa, que es profundamente débil en lo político.

En el momento actual, es imprescindible la creación de un gran frente de lucha antidictatorial como expresión de la unidad de acción de todos los que están contra la reacción, el fascismo, las torturas, el imperio, etc. Pero no para quedarnos rengos antes de empezar a caminar, sino para acumular la mayor cantidad de fuerzas posibles en torno a la clase obrera y sus aliados naturales, para avanzar hacia la única salida política que puede asegurar la recuperación del país, la libertad y el bienestar del pueblo. Las alianzas son el resultado de una correlación de fuerzas; se imponen por la fuerza de los hechos y no por transacciones verbales.

Un frente que no puede reducirse a los acuerdos entre organizaciones y partidos sino que, rescatando experiencias positivas del pasado, debe basarse en la formación de Comités de Lucha contra la Dictadura, como organismos de base obreros y populares, constituidos por frente de trabajo y zonas. Estos comités deben ser órganos de acuerdo político y movilización, por adhesión individual y sin carácter partidista, aunque no deben oponerse a la expresión de fuerzas políticas en su seno, centrándose en tareas y movilizaciones comunes de enfrentamiento a la dictadura.

La caída de la dictadura oligarco-imperialista puede no coincidir con la toma del poder por la clase obrera y el pueblo —aunque ello no puede asegurarse de antemano— pero la existencia de esa probabilidad no puede ser motivo para que las fuerzas revolucionarias rebajen sus objetivos ni disminuyan sus esfuerzos para llegar lo más lejos posible en aquella dirección. Si se da una situación en la que otras clases sean hegemónicas o en la que ninguna de las fuerzas triunfantes tengan capacidad decisiva, lo fundamental será mantener la independencia política del proletariado y el pueblo, fortalecer sus organizaciones de clase y revolucionarias, para proseguir la lucha por sus objetivos finales.

El difícil camino de la unidad

La creación de un gran frente táctico de todos los sectores políticos y sociales enfrentados a la dictadura requiere —es uno de los requisitos básicos— la más firme unidad de las fuerzas obreras y populares. La importancia de este principio, aunque aceptada formalmente por todas las organizaciones y partidos representativos de la izquierda, no parece estar igualmente asimilada en su concreción práctica, si nos atenemos a las dificultades que enfrenta el proceso unitario.

La recurrencia a viejas maniobras sectarias y las pretensiones hegemónicas de las organizaciones están en la base de esas dificultades. Consideramos absolutamente legítimas las aspiraciones de cualquier organización a primar con sus posiciones; ello será una constante de todo el proceso de lucha revolucionaria y es una ley derivada de la existencia de diferentes clases y sectores en el seno del pueblo. Sin embargo, parecen seguir existiendo posiciones en nuestra izquierda con la persistente ilusión de resolver su condición hegemónica antes de haber alcanzado la unidad política de todo el pueblo.

Nosotros preguntamos: ¿Qué favor le hacen a la unidad los que hablan de reactivar experiencias unitarias pero actúan provocando situaciones que conducen inevitablemente a la exclusión de determinadas organizaciones? ¿Qué favor le hacen a la unidad los que se arrojan el derecho de erigirse en tribunal para declarar traidores en las filas del pueblo cuando lo que existen son simples y legítimas diferencias políticas? ¿Qué favor le hacen a la unidad los que parecen actuar buscando la oportunidad, el pretexto y las diferencias para automarginarse o marginar a otros, en lugar de buscar las coincidencias, la acción común y los hechos positivos que forjarán esa unidad?

Si tal frente u organización tiene o no la concepción más correcta y revolucionaria, si tal o cual concepción será o no hegemónica en el proceso de lucha, dejemos que sean los hechos y la historia que lo demuestren. Compañeros, tengamos más confianza en que la clase obrera y nuestro pueblo sabrán elegir, más tarde o más temprano, el camino más justo para llegar a la victoria. Para ello, unamos los esfuerzos tendientes a forjar los instrumentos unitarios, de clase y políticos, que son necesarios a todas las concepciones, que son imprescindibles para vencer a nuestros inexorables enemigos.

Este es el único camino que conduce auténticamente a la unidad: el de la búsqueda de acuerdos y la acción sobre la base de las coincidencias, del respeto a la independencia política y la libre discusión de las diferentes concepciones, el de la unidad sin exclusiones. La unidad no es el patrimonio exclusivo de nadie; la unidad es un hecho o un resultado histórico y no la bandera de la cual pueden apropiarse algunos, en desmedro de otros, porque en ese caso dejaría de ser unidad.

19. AUMENTO DEL BOLETO. A partir del 29 de enero rigen las nuevas tarifas fijadas por la Intendencia de Montevideo para las empresas de ómnibus. El siguiente cuadro indica los precios anteriores, los nuevos precios y los porcentajes de aumento correspondientes a cada categoría.

	Precio <u>viejo</u>	Nuevo <u>precio</u>	<u>Aumento</u>
Boleto mínimo	N\$ 0,68	N\$ 0,75	10.3 %
Boleto intermedio	N\$ 0,73	N\$ 0,85	16.4 %
Boleto máximo	N\$ 0,78	N\$ 0,95	21.7 %
Estudiantes	N\$ 0,47	N\$ 0,55	17 %
Jubilados	N\$ 0,36	N\$ 0,40	11,1 %
Combinación	N\$ 0,42	N\$ 0,50	19 %

El boleto mínimo corresponde a los trayectos cortos (sólo puede viajar dentro de una de las zonas en que se ha dividido a la capital); el boleto intermedio permite atravesar un límite zonal; el máximo permite atravesar dos o más límites.

Este aumento —el tercero en siete meses— es el que más se acerca a las exigencias de las empresas de transporte, que pedían que el boleto mínimo se fijase en N\$ 0,79 y sólo reclamaban N\$ 0,86 para el máximo. El criterio de distribución de los aumentos seguido por el Intendente Rachetti es, pues, coherente con la política económica de la dictadura de castigar a los sectores que cuentan con menores ingresos, ya que el boleto máximo —que sufrió el mayor incremento— es el que deben pagar quienes residen más lejos de sus trabajos.

20. COSTO DE VIDA: CIFRAS OFICIALES DE 1977 Y DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS.

Según la Dirección General de Estadística y Censos, el aumento del costo de vida fue, en

diciembre, del 1,50 por ciento y, en todo el año 1977, del 57,28' por ciento. En cambio, de acuerdo con el Instituto de Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas, el costo de vida se incrementó en un 1,20 por ciento en diciembre y en un 58,8 por ciento en todo el año pasado. Ambas reparticiones coinciden en que el rubro que sufrió un mayor aumento fue el de vivienda (más del 66 por ciento).

La inflación uruguaya se sitúa, por primera vez desde el golpe de Estado de Pinochet, muy próxima a la registrada en Chile. Informaciones suministradas por la CEPAL califican a Argentina, Chile y Uruguay de "países altamente inflacionarios" y señalan que los índices registrados en 1977 en los tres países son muy superiores a los del resto de América Latina.

El siguiente cuadro indica el aumento de los precios al consumo en el Uruguay durante los últimos cinco años. Se ha tomado como base 100 el mes de marzo de 1973. Las cifras son las proporcionadas por la Dirección General de Estadística y Censos, y se refieren al índice general y a los cuatro rubros que lo componen.

	<u>1973</u>	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>
Índice general	118,8	210,5	381,8	575,2	909,9
Alimentación	124,7	215,1	367,5	542,6	889,9
Indumentaria	117,2	191,0	319,8	471,9	693,0
Vivienda	111,6	199,1	400,5	627,9	1.000,2
Varios	113,9	222,9	431,8	656,5	1.000,4

21. EL DEFICIT DE LA BALANZA COMERCIAL TRIPLICARIA EN 1977 EL REGISTRADO EN 1976.

El Banco Central dio a conocer el monto de las exportaciones e importaciones registradas en los primeros once meses de 1977. Las primeras su-

maron 642 millones 811 mil dólares y las segundas 526 millones 820 mil. El saldo negativo de la balanza comercial hasta noviembre es, pues, de 115 millones 991 mil dólares. Una vez que se tengan en cuenta las cifras de diciembre, el déficit de todo el año 1977 superará sin duda triple del correspondiente a 1976, que fue de 40 millones de dólares.

En medios oficiales se destacó el aumento del porcentaje de las exportaciones de productos no tradicionales, que en los primeros once meses de 1977 habrían representado el 57,6 por ciento del total y que en el mismo período del año anterior representaban el 51,42 por ciento. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que tal variación obedeció, más que a un crecimiento real de las exportaciones no tradicionales, a una disminución de las tradicionales. En particular, el rubro "Animales vivos y productos del reino animal" pasó de 113 millones 501 mil dólares en 1976 a 90 millones 797 mil dólares en 1977.

En cambio, según el Instituto Nacional de Carnes (INAC), en todo el año 1977 se exportaron 139 mil toneladas de carne (bovina, ovina y equina) por un monto total de 122 millones 566 mil dólares. El precio promedio por tonelada fue, pues, de 882 dólares. Para la carne vacuna, el precio promedio llegó a 926 dólares por tonelada. El principal comprador fue Brasil (29 mil 403 toneladas, es decir el 21,15 por ciento del total exportado) y el segundo fue Egipto (24 mil 506 toneladas).